

guibel, defensor de la Flores y de Quintero, y teniendo presente todo lo demás que convino.

Considerando: que Mendez está convicto y confeso del delito de falsa amonedacion: que respecto de Dominga Flores y de Calixto Quintero no hay prueba suficiente, para reputarlos reos: que tampoco está probada la emision de la moneda: que la falsificada por Mendez, no es de oro ni de plata: que con arreglo á la fraccion 3ª del artículo 670 del Código penal, cuando la moneda falsificada no es de oro ni de plata sino de otro metal, se debe imponer tres años de prision y multa de doscientos á mil pesos; que segun el artículo 672 del mismo Código, dicha pena debe reducirse á las dos terceras partes en el caso de que la moneda falsificada no haya tenido circulacion: que segun el 119, en toda sentencia en que se imponga multa de diez y seis pesos en adelante, los condenados que no puedan satisfacer la multa, sufrirán en vez de ella un número de dias de arresto, que no podrán bajar de diez y seis ni exceder de cien, y que segun el 113, cada uno de los multados debe pagar la multa que estime justa, dentro de los términos señalados en el Código; por lo expuesto, y usando respecto de la cantidad relativa á la multa, del arbitrio que concede el propio Código, se decreta: Primero; con relacion á Isidro Mendez, que solo condena á dos años de prision con arreglo á la fraccion 3ª del artículo 670, y á la parte final del artículo 672, por no haberse verificado la circulacion de la moneda que falsificó; y á pagar el minimum de la misma multa, que segun la fraccion 3ª citada del artículo 670, es de doscientos pesos, los que reducidos segun el final del artículo 672 á dos terceras partes por no haberse circulado la moneda, importa ciento treinta y tres pesos. Segundo: en el caso de que Mendez no pueda satisfacer esta cantidad, se le condena á diez y seis dias de arresto. Tercero: por no aparecer pruebas bastantes para condenar á Dominga Flores y á Calixto Quintero

se les absuelve del cargo. Cuarto: devuélvanse las actuaciones de primera y de segunda instancia al Tribunal de Circuito de Querétaro, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos de los puntos segundo y cuarto y por mayoría respecto del tercero, los Sres. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Aza.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Julio 9 de 1873.—*Alejo Gomez Eguiarte.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por D. Ambrosio Fernandez y Osante en representacion del Duque de Terranova y Monteleone, contra el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violacion de garantias individuales que otorgan los arts. 13, 14, 16 y 17 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que en Abril de 1850, el Ayuntamiento de esta Capital, con autorizacion del gobierno del Estado, vendió al duque de Terranova y Monteleone, para agregarlos á la hacienda de Atlacomulco, los terrenos conocidos con los nombres de "Acatlan el grande" "Acatlan el chico" y "Potrero de la Huerta" que pertenecian á los propios de la municipalidad.

Esa venta fué aprobada por la legislatura en 30 de Mayo del siguiente año, y sucesivamente por cuenta de los cinco mil

pesos que como parte del precio se quedaron á reconocer por nueve años con el rédito de cinco por ciento anual, los administradores de Atlacomulco hicieron abonos de quinientos pesos cada uno en los meses de Julio á Noviembre de 1856, hasta la cantidad de tres mil pesos; y segun recibo de la Tesorería municipal que obra en copia certificada, en 27 de Agosto de 1860 fueron enterados en aquella oficina los dos mil pesos, resto del precio de los terrenos mencionados.

En 8 de Octubre de 1863, el Ayuntamiento mandó cancelar la escritura de reconocimiento, en atencion á que estaba redimido ya en su totalidad el capital de cinco mil pesos, parte del precio que quedaba por pagar, comisionando para el efecto al regidor D. José Heredia, y quedando cancelada la escritura en 10 de Agosto del mismo año.

En 21 de Enero último, el Ayuntamiento acordó que el primer síndico formara, asociado del tesorero, la liquidacion del adeudo de la hacienda de Atlacomulco, y procediera desde luego con la facultad económica-coactiva á asegurar los dos mil pesos y réditos vencidos, que segun la liquidacion ascienden á mil doscientos setenta y dos pesos cuarenta y dos centavos, parte del precio de los terrenos comprados en 1850, dando por supuesto que era nulo y de ningún valor el pago verificado en Agosto de 1860.

Se notifica de pago al Administrador de la hacienda D. Ambrosio Hernandez y Osante, quien desde luego alegó la redencion del capital ofreciendo probarla, y negando que debiera un solo centavo, y el día 25 se trabó ejecucion en los mismos terrenos por no haberse encontrado dinero en la caja ni azucar en los almacenes de la expresada Hacienda; con fecha 26, el mismo Sr. Osante presentó escrito á este juzgado, entablando el recurso de amparo en nombre del Duque de Monteleone propietario de la Hacienda,

y pidiendo que desde luego se mandase suspender el acto reclamado.

Designa como garantías violadas por el procedimiento de que se queja, las que sancionan los arts. 13, 14, 16 y 17 de la Constitucion, y dice: que el Ayuntamiento no puede cobrar la cantidad de que se trata, sino en virtud del contrato constante en una escritura chancelada; y decidiendo por sí la nulidad de esa chancelacion, violó la garantía constitucional en virtud de la que nadie puede ser juzgado sino por el Tribunal que previamente haya establecido la ley (art. 14); que condenando á su parte á segunda paga, se erigió en tribunal especial con infraccion del art. 13 de la Constitucion, y embargando bienes, sin derecho para ello, atento á la prohibicion de ejercer violencia para reclamar su derecho, consignado en el art. 17; y por último, que el Ayuntamiento no es autoridad competente para molestarlo embargando sus bienes, y usando de la facultad coactiva, que no procede en el caso, infringió tambien la garantía que otorga el art. 16 de la Constitucion.

Decretada la suspension del acto reclamado y rendido el informe con justificacion, se mandaron pasar estos autos al que suscribe para que pidiera sobre lo principal, con arreglo á la segunda parte del art. 9 de la ley de 20 de Enero de 1839. Si hay algunos actos ejecutados por los gobiernos de hecho y que el soberano legítimo se vea obligado á mantener y reconocer como subsistentes, son sin duda y con mejor razon que otros los practicados por los ayuntamientos en la órbita de sus facultades municipales.

Estas se limitan á la conservacion, adelantamiento y seguridad de las poblaciones; son las que ménos ingerencia tienen en las contiendas políticas, y son indispensables para la conservacion de la sociedad durante la guerra civil. El gobierno Constitucional entre nosotros, se ha visto en la imprescindible necesidad de reconocer muchos de los

actos ejecutados por el gobierno reaccionario, y ha tenido que revalidar tambien muchos de los actos de la intervencion y del imperio.

Incuestionable como es la legitimidad y validez de la venta hecha por el Ayuntamiento de esta capital á la hacienda de Atlacomulco, no puede tampoco ponerse en duda la de los pagos verificados hasta 1856, supuesto que se hicieron con aprobacion del gobierno superior y fueron aceptados por el Ayuntamiento. ¿Pero es igualmente legítimo el pago de los dos mil pesos entorados en 27 de Agosto de 1860.

En esa fecha y durante la época que trascurrió desde el golpe de Estado hasta el triunfo de Calpulalpam, como se dice en el informe, existió en una parte de la República, y en lo que se llamó "Departamento de Itumbide" el gobierno de hecho de Miramon, y aun cuando en ese informe se hace valer que el entonces prefecto político consumió un acto de expropiacion recogiendo esos dos mil pesos de la hacienda de Atlacomulco, sin que el Ayuntamiento consintiera ni exigiera el pago, entre los documentos presentados por el Sr. Osante con su escrito de queja, existe en copia certificada el recibo estendido por la tesorería Municipal en 27 de Agosto de 1860, segun el que enteró en aquella oficina el Administrador de Atlacomulco la cantidad á que venimos refiriéndonos.

El pago, pues, se hizo al Ayuntamiento y no al Prefecto político, y hay ademas las circunstancias de que el plazo del capital estaba cumplido y el Ayuntamiento, aunque ilegítimo, pudo exigir el pago apoyado por las autoridades de hecho entonces existentes.

La circular de 29 de Enero de 1858 trascrita en el informe, reservando al Gobierno la facultad de aprobarlos si le pareciesen aceptables, declaró nulos y de ningun valor los *contratos, nombramientos y concesiones* hechas por los revolucionarios, desde el 17 de Diciembre de 1857; pero el pago no pue-

de considerarse como concesion ni como contrato, y por consiguiente tampoco puede considerarse nulo por solo los términos de esa disposicion. El decreto de 3 de Noviembre de 1858, tuvo por objeto impedir el despilfarro de las rentas de la Iglesia Mexicana y que se emplearan para fomentar la revolucion, y su art. 1º dice textualmente: "Son irredimibles por ahora y hasta que el Gobierno legítimo determine otra cosa, todos los capitales que se reconozcan á la mano muerta, sobre fincas rusticas y urbanas, sobre cualquiera industria ó productos naturales, ya sean que pertenezcan á corporaciones seculares ó regulares de ambos sexos, á cofradías, archicofradías, colegios, hospitales ó hermandades, á funciones religiosas, á aniversarios ó capellanías de gracia ó de sangre, ya sea que esten cumplidos ó no los plazos fijados en las escrituras de imposicion, ó el tiempo convenido en las simples obligaciones. Se refiere pues y solo hace mencion de los bienes eclesiasticos y capitales que se reconocían á las corporaciones religiosas, y tampoco puede deducirse de él, en mi concepto, la nulidad del pago á que nos referimos.

En atención pues, á las razones expuestas, los Tribunales competentes dilucidarán como se expresa tambien en el informe, la legitimidad del pago hecho en 1860, la subsistencia del adeudo y la obligacion de verificar segunda vez el pago; pero para no exceder sus facultades y para proceder de una manera legal, pudo pedir al Tribunal competente que declarara nulo ese pago ó insubsistente la cancelacion hecha en su virtud, y no verificar el cobro presumiendo como indudable la deuda. Ademas, la ley de 20 de Agosto de 1857, considerando, que declarar nulos los instrumentos otorgados durante el Gobierno interino, equivaldría á pretender que no se debieron celebrar contratos, ni extenderse textualmente, ni ejecutarse muchos actos sin los cuales no pueden existir ninguna sociedad, estableció en su art. 22: "Se revalidan tambien los

instrumentos públicos otorgados por notarios ó escribanos que residían en puntos sometidos al Gobierno intruso, aunque este los expidiera el fiat, siempre que dichos instrumentos tengan los requisitos que se exigían en los lugares donde se otorgaron;” y mal puede el ayuntamiento exigir como indudable el pago del adeudo procedente de un contrato, constante en una escritura cancelada, cuando en virtud de esa cancelacion, que revalidada surte los efectos de un instrumento público, se acredita de una manera plena que ese pago estaba verificado. En el acto de la ejecucion, el Sr. Osanto presentó al síndico coactor el testimonio de la cancelacion y los recibos de los abonos hechos en 1856 por valor de tres mil pesos, y se decidió continuar la diligencia por no constar en la copia de los documentos referidos el recibo de los dos mil pesos, por los que se despachó el embargo. Ese testimonio es el que obra en las ocho primeras fojas de estos autos, y aunque en el no existe efectivamente el recibo de 27 de Agosto de 1860, que corre unido á la foja siguiente, hay sí, la declaracion hecha por el Ayuntamiento, de que la Hacienda de Atlacomulco tenia ya redimido el capital de cinco mil pesos que adeudaba al fondo público, por resto de la cantidad en que le fueron vendidos los terrenos tantas veces mencionados; hay el acuerdo para la cancelacion de la escritura y la declaracion de que esta quedaba nula y de ningún valor ni efecto por ese capital de cinco mil pesos, y subsiste por lo respectivo á la venta de que en ella se trata, y esa declaracion es el recibo de la cantidad total y tenía por objeto librar al comprador de todo adeudo por razon del contrato de venta á que se refiere.

Así pues, el Ayuntamiento no debió considerar el adeudo como indudable, y además, el decreto núm. 56 expedido por la legislatura del Estado en 10 de Octubre de 1870, estableció en su art. único: “Los Ayuntamientos ejercerán por medio de los

tesoreros y síndicos, y con arreglo á la ley que en 20 de Enero de 1837 expidió el Gobierno general, la facultad económico-coactiva para hacer la recaudacion de las rentas y contribuciones de que se forma el fondo municipal; y exigiendo coactivamente el pago de un capital que no puede considerarse como renta ni contribucion, exedió tambien sus facultades; pero conforme á la misma ley de 37, (artículo 3º) *ningunas providencias coactivas tendrán lugar sino en los casos en que el derecho fiscal sea claro é indudable*, conforme á las leyes y disposiciones vigentes, y en su art. 2º declara: que deben entenderse por contenciosos aquellos puntos en que fundadamente se dude sobre la aplicacion fundada de la ley al caso particular que se verse, ó en que sean forzosas las actuaciones judiciales, como en las causas de contrabando y en las que se dispute la paga ó adeudo de una cantidad que por su origen, por la cuota ó por la *variacion de tiempo y circunstancias* ofrescan motivo fundado de duda sobre la aplicacion de la ley; de manera que aun conforme á esa ley no aplicable, y en que funda el Ayuntamiento sus procedimientos, ningunas providencias coactivas debieron tener lugar, puesto que el derecho para exigir el pago á la Hacienda de Atlacomulco no era claro é indudable, y habia motivo fundado de dudar por la variacion de tiempo y circunstancias. La circunstancia de que no obstante que estuviera el deudor en la inteligencia de que el pago verificado fuese legítimo, esperó hasta Octubre de 1869, para pedir la cancelacion de la escritura de reconocimiento, en nada mejora el derecho del Ayuntamiento, ni destruye las razones expuestas, que en mi concepto son bastantes para probar que ni la obligacion del deudor para verificar segunda vez el pago era indudable, ni procedia el uso de la facultad económico-coactiva para exigirlo.

Por consiguiente, el Ayuntamiento exedió sus facultades, extralimitó sus atribuciones, y habría procedido con mayor jus-

tificación esperando que el Tribunal competente resolviera esas cuestiones cuya existencia se reconoce en su informe. ¿Pero envuelven esos procedimientos la violación de las garantías individuales? el artículo 17 de la Constitución establece en su segunda parte: "Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho;" y el embargo empleado como coacción por el Ayuntamiento, y los procedimientos fundados en la ley de 20 de Enero de 1837, inaplicable á este caso, son una violencia no justificada y que incontestablemente infringe la prohibición constitucional.

El art. 16 previene. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento;" y la autoridad competente para despachar la ejecución, no era el Ayuntamiento, sino la autoridad judicial, quien previamente debía declarar subsistente esa obligación, para hacerla cumplir después á petición del acreedor.

Por último, el artículo 14 dice: "Nadie puede ser juzgado sino con leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley;" y es indudable también que la declaración de nulidad del pago hecho en 1860, la de que subsistente el adeudo, fuese indudable el empleo de la facultad económico-coactiva para verificar el cobro, importan la resolución de los derechos del deudor y la condenación á verificar segunda vez el pago, lo que pertenece á las atribuciones de la autoridad judicial, cuyo carácter no tiene el Ayuntamiento.—Es cierto que el quejoso no ha sido condenado hasta ahora en juicio alguno, como se dice en el informe; pero también es un hecho que la condenación á segunda paga es una pena que no debía ni podía imponerse sino en una sentencia de tribunal competente, y la declaración de si es nulo ó válido el primer pago, requiere una aplicación de la ley que

solo debía hacer ese mismo tribunal, y el ayuntamiento sin esperar á esa sentencia procede á exigir el pago, y presumiendo solo la condenación, ha procedido á ejecutarla. Se violó por consiguiente la prescripción constitucional que garantiza la intervención de la autoridad competente en los juicios, pues repito, importaba en juicio la resolución de los derechos del interesado en virtud del pago, y una pena al que se le obligase á verificarlo segunda vez.—Aun hay mas: el empleo de la facultad coactiva no tiene solo el carácter de aseguramiento, sino que supone la evidencia del adeudo fiscal y es por sí mismo una verdadera ejecución de pago, y si no evita del todo, restringe al menos y hace difícil la defensa del deudor, por lo que su empleo evita en el caso presente el juicio, necesariamente previo á la sentencia de segundo pago.—Si bien con arreglo al decreto del Estado de 10 de Octubre de 1870, corresponde al primer síndico y al Tesorero del ayuntamiento ejercer la facultad económico-coactiva, en los casos para que está concedida, como en el presente, no procedía su ejercicio, según hemos visto, es claro que ni el ayuntamiento, ni el síndico, ni el Tesorero eran competentes para librar el mandamiento de pago, en virtud del que fuese molestado el deudor en su posesiones; y como ya dije, la coacción para que verificase el pago es una molestia no justificada ni permitida que infringe la garantía sancionada por el artículo 16 de la Constitución.—Por último: siendo extemporáneos los procedimientos económico-coactivos, que no se limitan al aseguramiento, su empleo por el ayuntamiento es una violencia abusiva en la reclamación de su derecho, y equivale á que se hiciera justicia por sí mismo, con notoria infracción de la garantía que otorga el artículo 17 y con extralimitación de sus facultades.—El ayuntamiento hace valer en la parte final de su informe, que concluidos con la ejecución los procedimientos del coactor y ratificada esa ejecución con el hecho de haber citado de

remate al deudor, el negocio pasó ya á la esfera de judicial y es improcedente el recurso de amparo, segun el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869; pero además de que la citacion de remate no puede entenderse que ratifique la ejecucion, porque en la sentencia de remate debe precisamente declararse si hubo lugar ó no á ella, y esa sentencia debe ser muy posterior á la citacion, el acto reclamado en este recurso, es el procedimiento económico-coactivo, que no concluye sino con el pago, y que aun cuando estuviese concluido, podría concederse contra él la proteccion y amparo de la justicia federal, habiéndose además interpuesto este recurso desde el 26 de Enero. No obstante que conforme al artículo 102 de la Constitucion y ley orgánica de 20 de Enero de 1869, la sentencia en los juicios de amparo debe ser siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, sin hacer ninguna declaracion respecto de la ley ó acto que motive el proceso, he tenido que considerar el acto reclamado en si mismo y examinar las facultades del ayuntamiento y las cuestiones de que he hecho mérito, por su futura conexión con la procedencia de este recurso y por haberlo creído necesario para fundar si existió ó no la violacion de las garantías invocadas por el quejoso.—Por lo que, estando plenamente comprobados todos los hechos á que me he referido y cuyo conocimiento era necesario, siendo clara la violacion de garantías é indudable la procedencia de este recurso, el Promotor pide: que con arreglo á los artículos 14, 16 y 17; 101 y 102 de la Constitucion; y 18 de la ley de 20 de Enero de 1869, se declare: que la Justicia de la Union ampara y protege al Duque de Terranova y Montelcone contra los procedimientos económico-coactivos del ayuntamiento de esta capital, dirigidos á hacer efectivo el pago de los dos mil pesos y réditos de que se ha hecho mencion, y se remitan estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.—Cuernavaca, Febrero 8 de 1873.—*Nicolás Medina.*

Es copia que certifico. Cuernavaca, Febrero 10 de 1873.—*J. Anartasio Rego,* secretario.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Febrero 10 de 1873. Visto este juicio de amparo promovido por D. Ambrosio Fernandez y Osante de esta vecindad, en representacion del duque de Terranova y Montelcone, patrocinado por el C. Lic. Clemente Castillo, contra el Ayuntamiento de esta Municipalidad, por violacion de las garantías individuales otorgadas al hombre por los artículos 13, 14, 16 y 17 del Código fundamental de la República, cuya violacion tuvo lugar el 26 de Enero próximo pasado.

Resultando, 1º: que el quejoso expresa en su escrito del 26 del citado mes, en que introdujo el recurso, que el 19 de Abril del año de 1850, su representado y el Ayuntamiento, celebraron contrato de compra venta de unos terrenos llamados "Acatlan el grande," "Acatlan el chico" y "Potrero de la Huerta," en precio de diez mil pesos, de los que el Ayuntamiento vendedor, recibió en el acto cinco mil, quedando á reconocer el comprador otra cantidad igual, por nueve años, con rédito de un cinco por ciento, segun la escritura respectiva; que antes del vencimiento del plazo estipulado para el pago de la cantidad que se quedó á reconocer, fué satisfecha la de tres mil pesos, y la de los dos mil restantes se verificó en 27 de Agosto de 1870, esto es, despues del vencimiento de aquel, por lo cual se canceló la escritura de reconocimiento: que pretendiendo el Ayuntamiento segundo pago de los dos mil pesos antes referidos y sus réditos, computados desde Mayo del mismo año hasta el 21 de Enero último, ha hecho uso de la facultad económico-coactiva procediendo al embargo de bienes del mismo quejoso por la suma de tres mil ochocientos

setenta y dos pesos cuarenta y dos centavos que importa dicho capital y réditos; que con este hecho se han violado las garantías individuales otorgadas al hombre por los artículos 13 y 14, 16 y 17 del Pacto Federativo; la primera, porque al resolver el Ayuntamiento que se procediera de la manera que lo hizo, sentenció al quejoso á segundo pago, origiéndose así en tribunal especial; la segunda, porque si la propia corporacion creia tener derechos al repetido segundo pago, debió ocurrir á los tribunales competentes para ello, y no resolverlo por sí; la tercera, porque no estando previamente declarado nulo el pago que se hizo en 27 de Agosto de 1850, no podia el quejoso ser molestado en su persona, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que en el caso no lo es el Ayuntamiento; y la última, porque con el embargo que se practicó se ha ejercido violacion por parte del mismo Ayuntamiento para reclamar el derecho que cree tener al citado capital y réditos; que tampoco ha podido usarse de la facultad económico-coactiva, porque esta solo tiene aplicacion respecto de deudas ciertas y evidentes; por todo lo cual y apoyado en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, ocurriria á este Juzgado á solicitar amparo contra el referido Ayuntamiento.

Resultando, 2º: que el mismo Ayuntamiento en su informe con justificacion que rindió el día 7 del corriente por medio de su Síndico primero, expresa lo mismo que el quejoso en lo tocante al contrato de compra venta de los terrenos antes nominados, así como en lo relativo al pago de los dos mil pesos, verificado en 27 de Agosto de 1860, aunque asegurando que este fué nulo y de ningun valor, supuestas las disposiciones supremas de la circular de 29 de Enero y 3 de Noviembre de 1858, por lo que cree tener expedito su derecho para obligar á su deudor á segundo pago de los expresados dos mil pesos y sus réditos causados

hasta el 21 de Enero último en que se practicó la liquidacion correspondiente: que estando autorizado por el decreto número 55 de 12 de Octubre de 1870, del Congreso del Estado, para ejercer la facultad económico-coactiva, conforme á la ley de 20 de Enero de 1837, obró la Corporacion municipal dentro de la órbita de sus atribuciones: que por lo mismo no ha habido la violacion de garantías de que hace mérito el quejoso en este juicio; y que en virtud de lo preceptuado en la citada ley de 37, con el embargo practicado y remision de las diligencias respectivas al Juez de Hacienda del Estado, cesó ya el Ayuntamiento en el ejercicio de la facultad coactiva, siendo por lo tanto judicial el negocio á que este amparo se refiere, y aplicable en el caso el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Considerando, 1º: que si bien el Ayuntamiento no rindiendo, como debia, su informe con justificacion, sino que lo hizo por medio del Síndico primero, no hay duda de que el informe de este debe tenerse como de aquel, y por lo mismo llenado el requisito del artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, en cuyo informe se confiesan los hechos referidos por el quejoso, siendo esa confesion bastante para decidir en juicio conforme al artículo 768 del Código de procedimientos civiles.

Considerando 2º: que aun cuando el referido informe del Síndico primero no deba tenerse como del Ayuntamiento, lo mas que puede decirse es que este renunció al derecho que le concede el citado artículo 9º, como autoridad ejecutora del acto reclamado, ni que por esto sean dignos de desatenderse los documentos justificantes que á su informe acompañó el Síndico, pues ellos están autorizados por el presidente del referido Ayuntamiento y hacen fé conforme al artículo 776 del citado Código, en los cuales aparece que la Corporacion municipal, haciendo uso de la facultad económico-coactiva, procedió por medio de su Síndico pri-

mero y tercero al embargo de que se hace mención en los mismos documentos.

Considerando 3º: que de lo dicho se desprende, que el Ayuntamiento al obrar de la manera que lo hizo en la materia de que se trata, fué para hacer efectivo el pago de los dos mil pesos y réditos, que en su concepto, le debe aun la parte compradora, ó mas bien para obligar á esta al cumplimiento del contrato celebrado en 19 de Agosto de 1850.

Considerando 4º: que al ejercer el Ayuntamiento la facultad económico-coactiva, no juzgó á su deudor por ley alguna privativa ó de efecto retroactivo, ni se originó en tribunal especial, por lo que no debe decirse que con sus procedimientos haya violado las garantías consignadas en los artículos 13 y 14 del pacto federativo.

Considerando 5º: que si el Ayuntamiento de esta municipalidad crece tener algun derecho para obligar al comprador de los terrenos vendidos al pago de los dos mil pesos y réditos que dice deberle este, ese derecho procede evidentemente de la celebracion de un contrato, respecto del cual el mismo Ayuntamiento no debe considerarse como tal autoridad para los efectos de aquel, sino como una parte contratante y por lo mismo sujeta á las leyes comunes á que lo están los particulares.

Considerando 6º: que el decreto número 56 de 12 de Octubre de 1870, del Congreso del Estado, solo concede al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad económico-coactiva, conforme á la ley de 20 de Enero de 1837: "*Para hacer la recaudacion de las rentas y contribuciones de que se forma el fondo municipal*" cuyo caracter de renta ó contribucion no tienen los dos mil pesos y réditos cobrados, sino el de una parte del precio de los terrenos vendidos.

Considerando 7º: que en consecuencia, el Ayuntamiento no ha podido, en el caso de que se trata, hacer uso de la facultad eco-

nómico-coactiva, y por lo mismo no ha sido autoridad competente para librar al comprador de los enunciadados terrenos, mandamiento de pago de los dos mil pesos y réditos que en su concepto este le debe, ni para molestarlo en sus posesiones, embargándole los mismos terrenos, de donde se deduce, que en el procedimiento adoptado por la corporacion municipal, ha habido infraccion del artículo 16 de la Constitucion general de la República.

Considerando 8º: que el embargo practicado por el Ayuntamiento, que no ha sido competente para verificarlo supuesto que obró fuera de los casos expresa y terminantemente señalados por el citado decreto número 56, importa nada menos que una violencia ejercida por aquel, para reclamar su derecho que creé tener, siendo así que los Tribunales del Estado han estado y deben estar expeditos para administrar pronta y recta justicia, por lo que legalmente debe decirse, que se violó la garantía consignada en el artículo 17 de la Constitucion federal.

Considerando 9º: que aun cuando es cierto que la ley de 20 de Enero de 1837, que creó la facultad coactiva, dispone que hecho el aseguramiento de los bienes se remitan las diligencias respectivas al Juez de Hacienda para su prosecucion, dicha disposicion se entiende, en el caso de que haya legalidad en la ejecucion, de cuyo requisito carece la practicada por el Ayuntamiento, puesto que como se ha dicho, este no goza de la facultad coactiva en el caso en cuestion, de donde con toda claridad se infiere, que la intervencion del Juez de Hacienda en el negocio, es tambien ilegal, por lo que cupo perfectamente el acto de suspension del acto reclamado y sus efectos consiguientes, entre los que debe enumerarse dicha intervencion, por lo que igualmente cabe ahora el amparo contra ella, sin que por esto se entienda violado el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869; con fundamento del artículo 2º de esta ley y 102 del pacto

federativo, debía de declarar y declaro:—1º: La Justicia de la Union no ampara ni protege al Duque de Terranova y Monteleone, representado por D. Ambrosio F. y Osante, contra el Ayuntamiento de esta municipalidad, en el juicio que contra este ha promovido el segundo, por lo respectivo á la violacion de los artículos 13 y 14 de la carta fundamental de la República, por no haber existido tal violacion.—2º: La misma Justicia de la Union ampara y protege al Duque de Terranova y Monteleone, contra el mismo Ayuntamiento, por violacion de las garantías individuales otorgadas al hombre por los artículos 16 y 17 del pacto federativo, cuya violacion tuvo lugar con el embargo que la repetida Corporacion municipal practicó en bienes del quejoso en 25 de Enero del corriente año. Hágase saber al interesado y al Promotor fiscal, remitiéndose original este expediente á la Corte Suprema de Justicia para su revision, sacándose previamente copias de esta sentencia para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion, Diario Oficial del Supremo Gobierno de la República y Periódico Oficial del Estado.

Así definitivamente juzgando lo mandó y firmó el Ciudadano Lic. Manuel M. Rendón, Juez 2º suplente de Distrito, de que doy fé.—*Manuel M. Rendón.*—*José Anastasio Rego*, secretario.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Febrero 10 de 1873.—*José Anastasio Rego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 27 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Morelos por el C. Ambrosio Fernandez y Osante, en representacion del Duque de Terranova y Monteleone, contra las providencias del Ayuntamiento

de Cuernavaca, en virtud de las cuales trata de hacer efectivo con la facultad económico-coactiva, el pago de dos mil pesos y 160 lites que dice esa corporacion adeudarle el quejoso como parte del precio en que lo fueron vendidos unos terrenos llamados de Acatlan el grande, Acatlan el chico y Potrero de la Huerta, alegándose por el representante de Monteleone, que los actos del Ayuntamiento importan una violacion expresa de las garantías consignadas en los artículos 13, 14, 16 y 17 del Pacto federal de la República. Vistas las constancias de autos, y considerando: que el Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante escritura pública, celebró un contrato con el representante del Duque de Terranova y Monteleone al venderle los terrenos de Acatlan el grande, Acatlan el chico y Potrero de la Huerta; que si el quejoso ha hecho un pago indebido á una corporacion que el Ayuntamiento de Cuernavaca estima ilegítima, esta declaracion debe hacerse por el Tribunal competente; que el ayuntamiento como parte contratante no puede decidir las cuestiones que se susciten por causa de ese mismo contrato, ni menos usar de la facultad económico-coactiva que sirve para hacer efectivos los impuestos; el acto del embargo así como la decision del Ayuntamiento referido, importan una violacion expresa de los artículos aducidos por el peticionario en su escrito de queja. Con tales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juzgado de Distrito de Morelos en la parte que dice: la Justicia de la Union ampara y protege al Duque de Terranova y Monteleone, contra el Ayuntamiento de esta municipalidad, por violacion de las garantías individuales otorgadas al hombre por los artículos 16 y 17 del pacto federativo, cuya violacion tuvo lugar con el embargo que la repetida corporacion municipal practicó en bienes del quejoso, en veinticinco de Enero del corriente año.

Devuélvase los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta senten-

cia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron —José M. Iglesias.—Petro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José M. Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—M. Anza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—Juan A. Muteos, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 10 de 1873. Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por Lucrecia Romero, á nombre de su marido Manuel Robles, contra la consignacion de este al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: Lucrecia Romero solicita amparo en favor de su marido Manuel Robles, contra el Coronel del primer batallon de Guardia Nacional del Estado, alegando que su marido fué llevado á la cárcel por la policía, el 26 del próximo pasado, á causa de haberse embriagado, y al día siguiente la autoridad política lo destinó al servicio de las armas sin su voluntad, con infraccion del art. 59 de la Constitucion. El Coronel del batallon mencionado informa, que Robles se presentó voluntariamente á servir por quedar libre de la pena que se le impusiera por un delito leve que habia cometido.

Habiendo desconformidad en los hechos, creo necesario el suscrito que se reciba á

prueba el negocio, para aclarar si hubo voluntad ó no en el quejoso al entrar en el servicio militar. El Juzgado lo decretará así si le parece conveniente, y pedirá los informes respectivos á la autoridad política consignante; pero cumpliendo el que habla con el deber que le impone la ley de pedir desde luego sobre lo principal, y considerando: que si el amparante no prestó su consentimiento para servir sino en virtud del amago de una pena en caso de no hacerlo, puede decirse en justicia que realmente no ha tenido voluntad pará ello, por la coaccion que se le hacia al prestarla. Concluye opinando, que la Justicia federal debe amparar y proteger al mencionado Robles contra el servicio militar que se le exige en el primer batallon de Guardia Nacional del Estado, contra lo prevenido por el art. 59 de la Constitucion.

Guadalajara, Febrero 24 de 1873.—A Camarena.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Abril 19 de 1873.—Vistos: La Sra. Lucrecia Romero como esposa de Manuel Robles, entabló ante este Juzgado juicio de amparo y proteccion de garantías, alegando: que su marido fué conducido á la cárcel por la policía, sin mas motivo que haberse embriagado, y la Jefatura política lo consignó al servicio de las armas, al batallon 19 de Guardia Nacional, violandose con esto en su contra el artículo 59 de la Constitucion general. Pedido el informe al C. Teniente coronel Samuel Lopez, al evacuarlo expuso: que Robles se encontraba en la penitenciaría por delito leve, y que al hacer la calificacion, dijo que servía voluntariamente al Estado en el primer batallon, por salvarse de la pena que se le asignara por el delito que habia cometido.

Recibido el negocio á prueba, la intercedida no promovió ninguna, y este Juzgado para mejor proveer en definitiva, pidió